

América Latina, a vueltas con la identidad nacional

Manuel Alcántara Sáez

La construcción del Estado nación es uno de los logros más significativos en la historia de la humanidad. Se basa en aspectos institucionales y en otros de naturaleza identitaria. Hay una mezcla de voluntad y de oportunidad, de cuestiones defensivas grupales y de ordenamientos rituales regulares, de satisfacción de equilibrios emocionales y de racionalidad en la obtención de objetivos.

El Estado nación se ha desarrollado con gran fortaleza en términos universales a lo largo del siglo XX, culminando los procesos que venían incubándose a partir del final de la Edad Media. Su evolución ha dado paso a diferentes modelos que coincidían en retener algunos elementos clave inspirados en el concepto de soberanía de Juan Bodino, como la capacidad de tener un ejército propio, de acuñar moneda y de gravar impositivamente, que Max Weber sintetizó en el ejercicio en condiciones de monopolio del uso de la violencia legítima y del desarrollo de una burocracia independiente y estable surgida por criterios de mérito, siguiendo la pauta establecida por el pensamiento de Confucio en China.

Desde el inicio, el Estado nación tuvo que saber integrar los dos términos, circunstancia que, de manera ideal, dio paso a dos modelos en su desarrollo.

Manuel Alcántara Sáez es profesor de la Universidad de Salamanca y director de Flacso España.

Aglutinados desde las independencias del siglo XIX en torno a populismos, ideas revolucionarias y oposición a políticas neoliberales, los países latinoamericanos están hoy ausentes de un liderazgo capaz de incorporar el indigenismo y los efectos de la globalización.

El primero fue aquel en el que el Estado, surgido de una voluntad poderosa impuesta por la fuerza por un grupo minoritario para controlar a gentes y territorios, construyó a la nación. El segundo supuso que un grupo humano más amplio, con sólidos elementos de autoidentificación compartidos en el amplio ámbito de lo cultural y que se concebía a sí mismo como “nación”, buscó al Estado como instancia de supervivencia. Sendos modelos ideales llegan hasta la actualidad como explicaciones del acontecer político.

En América Latina los procesos independentistas acaecidos de manera prácticamente simultánea (con las excepciones de Cuba y Panamá) se dieron en el momento histórico en que el modelo del Estado creando a la nación (Francia) comenzaba a girar hacia el segundo modelo de la nación creando al Estado (Italia y Alemania), y coincidieron con el asentamiento de los efectos de las revoluciones americana y francesa en clave del protagonismo del concepto de soberanía popular. La historia del siglo XIX latinoamericano es la de la integración de estos procesos con resultados muy dispares, pero con una constante que se ha mantenido hasta el presente como un rasgo insólito de la región frente a otras del mundo: la estabilidad de las unidades políticas establecidas. En efecto, los Estados existentes en 1830 perviven hasta la actualidad, con el añadido de los dos citados más arriba. Cuba alcanzó la independencia de España en 1898 y Panamá se desgajó de Colombia en 1903.

El patrón repetido para los países latinoamericanos recogía un Estado asentado en el diseño del constitucionalismo liberal y que como consecuencia de las guerras de emancipación, tenía una debilidad inicial enorme por el deterioro sufrido en las infraestructuras, el abandono de las cosechas y las deudas adquiridas. Pero la debilidad era también resultado del legado colonial, que no había dejado prácticas administrativas en el mundo criollo, y por la dualidad de las repúblicas de indios y criollos, a lo que se añadía el esclavismo de origen africano. Asimismo, la presencia de actores relevantes

En el primer centenario de las independencias se instaló una corriente histórica revisionista en búsqueda de grandes mitos fundacionales

como la Iglesia católica condicionaba inicialmente el desarrollo de la soberanía autónoma de un espacio público muy mediatizado por su control de la educación, su papel como uno de los principales latifundistas y su presencia en el mundo indígena.

Si la construcción del Estado fue complicada, no lo fue menos la creación de la nación. Aquel no

disponía de instrumentos suficientes para el establecimiento de una administración pública eficiente, un ejército ajeno a las montoneras o a la existencia de caudillos con fuerza propia o incluso la posibilidad de garantizar inversiones en el terreno de las comunicaciones. La nación, por su parte, se encontraba invertebrada, con numerosos grupos sociales separados por diferencias étnicas y una progresiva desigualdad derivada de la acumulación de riqueza diferenciada a favor de las minorías criollas. A este escenario se añadió, a partir de 1880, en un grupo reducido de países, el impacto de grandes contingentes migratorios procedentes sobre todo del sur de Europa, aunque también del este europeo y de los dominios del imperio turco.

Desde el último tercio del siglo XIX, América Latina no estuvo ajena al impacto del desarrollo del capitalismo mundial con la expansión del comercio, especializándose en el suministro de materias primas y productos de consumo de bajo valor agregado. Así, la explotación de café, caucho, cacao, banano y de la caña de azúcar junto con el guano, salitre, hierro, cobre y estaño, dio paso a sendos ciclos productivos que definieron buena parte de la política del momento. Igualmente, la presencia de Estados Unidos, más activa en el norte de la región, fue un elemento de notable importancia, de modo que pasaron a ser un actor referencial tras las guerras de Tejas y contra México, y

más tarde las distintas intervenciones en el Caribe que tuvieron su punto álgido en Cuba y Panamá, aunque continuaron hasta la década de 1930.

Y surgió el Estado populista en América Latina

La generación del novecientos supo interpretar muy bien el nuevo estado de las cosas de manera que, desde perspectivas nacionales diferentes, sentó las bases intelectuales para labrar los profundos cambios que se comenzaron a dar a favor de las propuestas en clave de lo nacional popular de las décadas siguientes. Las dos guerras mundiales de las que América Latina estuvo prácticamente ajena, aunque no dejara de estar afectada, sobre todo en el caso de la Segunda, sirvieron para dar consistencia a la forma autónoma en que avanzó la región. Se dieron cita cuatro argumentos muy poderosos que si bien no actuaron de manera simultánea en todos los países, sí funcionaron como una malla integradora.

En primer lugar, la cercanía de la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América y del primer Centenario de las independencias, en un lapso de apenas dos décadas, acrecentó una corriente de interpretación histórica revisionista que abonó el terreno para la búsqueda de los grandes mitos patrios fundacionales. Coincidió además con el proceso de consolidación de ejércitos que ya no tenían ningún legado peninsular en sus filas, que se constituían bajo el auspicio de las grandes potencias de la época (Francia, Prusia e Inglaterra), y con los esfuerzos exitosos de los ministerios de Educación para formar a los nuevos ciudadanos que alejaban a las instituciones religiosas con interpretaciones republicanas del pasado reciente.

En segundo lugar, se dio un paso adelante en la aceptación de la dualidad indígena-criollo y la síntesis mestiza de la misma. La profunda influencia de la revolución mexicana en toda América Latina y, casi de manera simultánea, la reivindicación del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre del concepto de “indoamérica”, que constituyó uno de los pilares ideológicos fundamentales del aprismo, fueron hitos de la nueva situación. El reconocimiento de la comunidad campesina mediante la adjudicación de derechos de propiedad, la reivindicación de su cultura ancestral, que coincidió con los primeros grandes descubrimientos arqueológicos, y el ensalzamiento como portadores de una cultura de la resistencia, fueron ejes de una posición que a partir de ese momento no tendrá marcha atrás.

En tercer lugar, la asunción de un enemigo externo común, EEUU. Ello se justificaba por una variopinta casuística muchas veces contrapuesta, pero

que sumaba haciendo plausible el argumento. Fuera la confrontación católico-protestante, el choque hispano-anglo, o visiones antagónicas de la existencia en clave de espiritualismo frente a materialismo, la potencia del Norte, cuyo desempeño en Cuba y Panamá había mostrado a las claras su determinación, no solo tutelar sino imperial, se irguió como el anatema al que contraponerse. José Martí, José Enrique Rodó, Rubén Darío y el propio Haya de la Torre, entre muchos otros, lanzaron a los cuatro vientos las soflamas antiimperialistas que fueron recibidas sin cautela alguna por la gente.

En último lugar, se consolidó la idea, frente a los supuestos del liberalismo ampliamente difundidos desde 1870, de la necesidad de contar con un Estado con un nivel operativo mínimo a la hora de hacer real la lista de derechos reclamados y ser titular de bienes públicos que se consideraban esquilmos por la rapacidad del capitalismo internacional. Desde el Estado batllista en Uruguay de principios del siglo XX, hasta el Estado configurado por la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, pasando por la llegada al poder del radicalismo en Argentina se compartía la idea de la necesidad de un nuevo instrumento político acorde también con las transformaciones que se estaban produciendo entonces en los países europeos.

En este escenario, el avance de la democracia basada en el libre juego para elegir periódicamente a las autoridades era ampliamente limitado. Se daba una notoria restricción de lo electoral a un cuerpo político muy reducido y, además, se registraba la presencia habitual del ejército en la vida pública. Este se excedía de su papel arbitral o moderador adoptando otro más interventor como intérprete del bienestar general. En su condición de columna vertebral del Estado, el ejército impuso un estilo de hacer política que en parte hundía sus raíces en el siglo anterior, pero que también se miraba en lo que acontecía durante buena parte del primer tercio del siglo XX en los países europeos, entre los que España e Italia eran claros referentes.

La aparición de las masas como nuevo objeto social, gracias a las transformaciones que se registraban en las economías de los distintos países, requirió una respuesta política cuando las mismas presionaron al poder por el reconocimiento de derechos ya recogidos en los ordenamientos legales o de derechos innovadores en consonancia con el momento. Este nuevo sujeto político colectivo, que en Europa había dado paso, sosteniéndolos, a los regímenes fascistas y comunistas, tuvo una expresividad propia en América Latina bajo el término de populismo.

Los regímenes populistas latinoamericanos supieron dar un sentido a una nación que era distinta porque suponía un proyecto integrador de diferentes

colectivos articulados en torno al nuevo concepto de pueblo. Desde los descamisados a los cholos, pasando por los emigrantes gallegos o del sur de Italia desclasados y sin saber qué nacionalidad poseían, o los ejidatarios, los pobladores del *sertão*, pero también los estibadores de los grandes puertos o los mineros bolivianos o los trabajadores de las pesqueras peruanas de Chimbote en mayor o menor medida sindicalizados. Y gran parte de esos grupos de pronto tuvieron a su frente a un líder a quien seguir, alguien con quien establecer una relación emocional, de afecto patriarcal, que, poseedor del control de la capacidad estatal, podía dignificarles mediante el desarrollo de derechos y la potenciación del gasto social.

La historia del cardenismo en México, del varguismo en Brasil, del peronismo en Argentina, del aprismo en Perú, del velasquismo en Ecuador o del ibañismo en Chile transcurre más o menos por

esos vericuetos, como pudo haber ocurrido con la historia del gaitanismo en Colombia si el líder no hubiera sido asesinado dando paso a un periodo de brutal violencia. Son procesos que se conocen con el término de “revoluciones nacionales populares”, a los que se sumaron los desarrollados en Venezuela por parte de Acción Democrática en 1945-48 y, 10 años después, tras la caída de la dictadura; en Costa Rica, por parte del Partido de Liberación Nacional a partir de 1949; o en Bolivia, gracias al Movimiento Nacionalista Revolucionario tras su éxito en 1952.

El populismo latinoamericano que transcurre entre 1930 y 1960 construyó el Estado y construyó la nación, pero se trató de una construcción con limitaciones serias. En primer lugar porque el Estado se articuló, partiendo del momento de mínimos que para la economía mundial siguió a la gran crisis de 1929, en una época de bonanza económica por los efectos de la Segunda Guerra mundial y sus secuelas. Este escenario dio pie a la teoría de la dependencia que sirvió para intensificar pautas de fuerte nacionalismo económico que mostraron dificultades en su sostenibilidad en el largo plazo. También contribuyó a la gestación de una polarización social muy fuerte que concitó de nuevo la intervención de los militares. La cultura política generada predispuso a los diferentes grupos en contra de la democracia. Finalmente, el reformismo no solo no fue capaz de solventar problemas de desigualdad y margi-

El populismo que transcurre entre 1930 y 1960 en Latinoamérica construyó el Estado y construyó la nación

nación tradicional sino que fue incompetente a la hora de avizorar las nuevas transformaciones que se estaban dando con el inicio de la explosión demográfica y por los novedosos procesos de urbanización. Todo ello terminó por construir sociedades muy diferentes a las anteriores, con el consiguiente reflejo en la existencia de naciones que debían ser creadas de nuevo.

La revolución posible

El triunfo de la revolución cubana precipitó cambios sistémicos de profundo contenido en toda la región y, asimismo, introdujo al menos seis elementos que integraron gran parte de la nueva agenda política con independencia de su solidez en términos de conexión con la realidad, ya que su componente simbólico estuvo presente desde sus inicios, alcanzando pronto el nivel de mitos. En primer lugar, el éxito revolucionario mostró que aparentemente se podía llegar al poder siguiendo la vía insurreccional; segundo, la orientación hacia el polo soviético era factible en plena guerra fría; tercero, había una agenda posible de profundas transformaciones sociales y económicas; cuarto, era viable construir el “hombre nuevo” bajo las virtudes de abnegación, solidaridad y compromiso del buen revolucionario; quinto, se imponía la solidaridad y unidad latinoamericana en clave del anhelo de la “patria grande”; y sexto, se podía articular una gran alianza con sectores muy heterogéneos entre los que se encontraban ámbitos de la iglesia católica que ya entonces venía alumbrando la teología de la liberación y otros del capitalismo empresarial nacional.

La revolución cubana despertó un furor muy intenso en la política latinoamericana que no concluyó sino tres décadas después, aunque en algunos países terminó antes. Contribuyó a generar una mística de identidad reforzada en lo popular que ahora volvía a vigorizarse con el antiamericanismo. El martirologio, cuyo emblema es la figura del *Che*, se extendió a miles de jóvenes masacrados por ejércitos que estaban de sobra preparados, gracias al entrenamiento norteamericano para confrontar la ola revolucionaria. Las respuestas fueron diferentes en cada caso, pero el denominador común seguía el catecismo de la denominada doctrina de la seguridad nacional. La nación aquí tenía un sentido muy diferente al legado de las décadas precedentes. Se podría decir que se había dado un cambio de enmarque, que el propio término era sustraído de la tradición popular que era quien lo había expandido. Además, la doctrina de la seguridad nacional era foránea, acuñada en los centros de actuación franceses en el conflicto de la guerra de Argelia, fundamentalmente, y luego en otros ámbitos coloniales había

pasado a las escuelas de guerra estadounidenses, prestas a sustituir en el papel de gendarme a Francia en Indochina.

Los valores de la revolución cubana imbuyeron a la izquierda latinoamericana, y en buena parte de las sociedades de la región también arrojaron un halo de simpatía que creó un acervo compartido que se mantuvo en generaciones sucesivas. El reflujo contrarrevolucionario coincidió con el agotamiento del modelo económico nacional popular basado en la política de sustitución de importaciones y en un Estado que tenía un papel central con fuerte presencia reguladora y controlador de un amplio sector público. La crisis desencadenada por el incremento de los tipos de interés en un momento de progresiva alineación de las economías occidentales antesala de la globalización financiera precipitó, con diferente ritmo e intensidad, la implementación de medidas neoliberales. Estas eran conducentes a reducir el tamaño y las funciones del Estado mediante privatizaciones, eliminación de subsidios y disposiciones desreguladoras, así como contenían la búsqueda del equilibrio fiscal.

El golpe neoliberal y la renovación del estatismo

La ola neoliberal fue aupada después de que algunos países vivieran procesos traumáticos de hiperinflación como aconteció en Bolivia, Perú, Argentina y Nicaragua. En poco tiempo las masas dejaron de ser orientadas por criterios de ciudadanía para serlo por otros de consumidores. El resultado fue una dramática descomposición social de un ejército de informales a los que, como Hernando de Soto propuso con cierta ingenuidad, había que sacarles de esa postración confiriéndoles el título de propiedad de su ranchito construido precariamente en una de las miles de invasiones de terrenos fiscales o de propiedad privada que se venían produciendo.

El reflejo de este escenario en la política no se hizo esperar, a través del desalineamiento y la desafección de los partidos tradicionales, incluso de aquellos que tenían configuración de clase. La llegada al poder de Alberto Fujimori en Perú se presentó como un ejemplo típico de esa situación calificada de “antipolítica”, así como el ascenso de fórmulas denominadas neopopulistas en Bolivia. También el cambio ideológico drástico del peronismo menemista es una expresión del reacomodo que se dio en la década de 1990. Fue también el momento del ascenso de Hugo Chávez, beneficiado por el fracaso dramático de los partidos tradicionales y el hundimiento de la economía venezolana.

El escenario político de América Latina al finalizar el siglo XX recogía en la mayoría de los países una fuerte decepción con las medidas neoliberales

implementadas por la ausencia de resultados palpables en el terreno redistributivo y por el incremento de la corrupción por los opacos procesos privatizadores llevados a cabo. La idea del saqueo a la nación, el repudio a los “vendepatrias” y la ineficacia del mercado para satisfacer necesidades mínimas de la gran mayoría eran los argumentos del creciente descontento político. A ello se añadía en México el desgaste del partido oficial tras siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder y la posición mayoritaria de la sociedad a favor del cambio. Las crisis llevaron a miles de personas movilizadas a las calles, derribaron gobiernos y evidenciaron una urgente necesidad de cambio. Esto fue más evidente si cabe en Ecuador, Argentina y Bolivia. Pero en otros países vecinos, como Uruguay y Brasil, el recambio de la élite política se hacía inevitable inaugurándose un nuevo ciclo político.

En cierta medida, poco a poco se gestó una clara división regional como nunca antes, basada en una combinación de elementos referidos a la definición de la acción política en términos institucionales con otros de carácter ideológico identitario. La iconografía con figuras como Bolívar, el posicionamiento en pro de una mayor integración regional con inéditos mecanismos de solidaridad entre los países, gracias en gran parte a la bonanza petrolera venezolana y al compromiso de un Chávez convencido con la misión a realizar, la incorporación a la familia latinoamericana de la Cuba satanizada y el repudio explícito de EEUU constituyeron un discurso renovado de la dignidad nacional en el que aupar la nueva propuesta política. Una invitación que asumía patrones antiguos en la expresión populista, combinando una intensa movilización social de nuevo cuño débilmente institucionalizada junto con liderazgos personalistas muy fuertes. La lucha interna se canalizaba a través de propuestas que tendían a construir nuevas hegemonías bajo el paraguas del bolivarianismo o del socialismo del siglo XXI, existiendo peculiaridades nacionales como el kirchnerismo argentino o la “revolución ciudadana” ecuatoriana.

Los dos grupos de países que conformaron esta partición tenían algunas diferencias significativas entre sus integrantes, pero había factores de suficiente peso para referirse a sendos bloques con cierta coherencia. La diferencia viene conformada por las experiencias vividas en un periodo difuso que se inicia en torno a 1998 y concluye hacia 2003. Un lustro en el que para algunos países –con la excepción del caso chileno, que puede ser un factor explicativo de primer orden– se evidenció, como ya se señaló, el fracaso de las medidas neoliberales, pues no solo no disminuyó la desigualdad en la región, que era –y sigue siendo– de las más altas del mundo, sino que tampoco resultaron contribuidoras a su crecimiento.

Pero en otros casos, como sucedió en Colombia, la agenda venía dictada por el enconamiento de la violencia de expresiones múltiples al amparo de la actuación guerrillera y paramilitar en connivencia con el narcotráfico. El surgimiento de Álvaro Uribe, adalid de una respuesta dura a la vez que animador de medidas neoliberales en la economía de Colombia, supuso una respuesta de naturaleza muy diferente a la mayoría de los países suramericanos. En cierto sentido, el polo oficioso gestado entre Uribe y los gobiernos panistas mexicanos de Vicente Fox y Felipe Calderón fue el gran antagonista del construido en torno a la figura de Chávez.

El eje vinculado al chavismo tuvo en común la puesta en marcha de reformas políticas de diferente calado, como fueron los drásticos cambios constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia, junto con las reformas constitucionales parciales de Nicaragua y en Venezuela otra vez, y que se consolidan con los nuevos liderazgos aupados al poder en la mitad de la década pasada de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Daniel Ortega (Nicaragua) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina). En estos países la respuesta antineoliberal se constituyó en un fuerte componente de una identidad social mayoritaria que se identificó con la propia identidad nacional. Las fuerzas políticas que llegaron al poder supieron capitalizar ese escenario asimilándolo, en gran medida, con los supuestos existentes medio siglo atrás, aunque a los efectos de construir un nuevo discurso se prefirió sepultar aquel pasado, permaneciendo la renovada apuesta estatista.

Ni institucional ni ideológicamente, los países considerados en este bloque tienen un denominador común y, de hecho, las interpretaciones acerca de la izquierda en el poder en la región, aunque quizá de manera reduccionista y superficial, han establecido la existencia de dos subgrupos; uno de corte populista más a la izquierda y otro de naturaleza socialdemócrata. Ahora bien, esas diferenciaciones no han tenido en cuenta el hecho de que los gobiernos chilenos de naturaleza coalicional, aunque estuvieran presididos por dos socialistas como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, eran (son) gobiernos de coaliciones multipartidistas con formaciones alejadas de la izquierda; circunstancia similar a la de Brasil durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de

**Ni institucional ni
ideológicamente los
países latinoamericanos
considerados de
izquierda tienen un
denominador común**

Dilma Rousseff, en los que, comenzando por los propios vicepresidentes, la inclusión de fuerzas del centro e incluso de la derecha es evidente. En ambos países debe tenerse en cuenta la pluralidad de sus sociedades y, consecuentemente, de sus sistemas políticos, como también sucede en Uruguay.

Este escenario comenzó a resquebrajarse cuando Chávez falleció en marzo de 2013. Después, Venezuela concitó dos circunstancias novedosas en el contexto de un clima de polarización cada vez más agudo. En la medida en que era imposible transferir el carisma, el liderazgo bolivariano pasó por un proceso de compleja reconfiguración toda vez que Maduro, el presidente elegido el 14 de abril de 2013 en unos comicios cuyos resultados fueron muy cuestionados, no poseía el liderazgo de su predecesor, tanto en carisma como en habilidades políticas. La historia señala la complejidad de una situación como esta y la necesidad de que pase cierto tiempo para que se establezca un liderazgo sólido. Pero la presente situación de la economía venezolana, con una inflación galopante y un déficit público enorme, con problemas de desabastecimiento de productos de primera necesidad y unos índices muy elevados de inseguridad ciudadana, no parece otorgarle tiempo suficiente. Ello, además, tiene unas repercusiones evidentes para el resto de la región, que entra en un periodo de ausencia de un líder aglutinador de diferentes sensibilidades, tanto de aquellas generadas por factores vinculados a la personalidad propia de cada uno de los otros líderes nacionales como del ímpetu en la imposición de un modelo validado por el socialismo del siglo XXI. El carisma de Chávez, que tan bien funcionaba entre sus pares, está ausente y no sirve mucho a Maduro haber sido ungido por el fallecido presidente como su sucesor.

Indigenismo y globalización

Este escenario complejo deja un poso de cambios superficiales gracias al éxito de visiones poscoloniales que se refleja en el tratamiento a iconos, como pudieran ser las estatuas de Colón o de Pizarro en Buenos Aires y Lima, desplazadas desde lugares centrales a la más pura marginalidad ante buena parte de la indiferencia ciudadana. No obstante, no debe cerrarse sin abordar dos cuestiones presentes en la vida política de los países latinoamericanos y que tienen un impacto severo al referirse al proceloso asunto de la identidad, máxime cuando se estima que la misma es un componente fundamental de cualquier comunidad política. Me refiero en concreto a dos aspectos que sobresalen dentro de una maraña ciertamente enredada. Se trata del peso de la identidad étnica y del impacto de la identidad globalizada.

La cuestión indígena es un asunto que está lejos de haberse diluido en la agenda de asuntos pendientes en la región. Es relevante tanto por una cuestión de número como por otra de intensidad. Si bien el aldabonazo de su presencia se dio con el llamado alzamiento zapatista de Chiapas, en enero de 1994, y continuó a través de numerosas movilizaciones sociales; de entre las cuales las que tuvieron mayor impacto sucedieron en Ecuador, con el derrocamiento de tres presidentes, fue el éxito de Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia lo que condujo a dar relevancia al asunto. Aunque es cierto que Bolivia, junto con Guatemala, son dos países donde nunca se ha puesto en duda el carácter demográficamente mayoritario de las comunidades indígenas, estas tienen una presencia nada despreciable en otros países del área.

La cuestión indígena es relevante por número y por intensidad no solo en Bolivia y Guatemala, sino en toda la región

Por ejemplo, en México las comunidades que se autoidentifican como indígenas, de acuerdo con datos del último censo poblacional realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuentan con 15,7 millones de personas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) identifica 25 regiones indígenas en 20 Estados, siendo su presencia visible en todas las entidades del país. Una encuesta reciente de Parametria señala que ocho de cada 10 entrevistados apoyan que los pueblos indígenas elijan a sus autoridades de acuerdo con los usos y costumbres, siendo el Estado de Oaxaca el más relevante, ya que de sus 570 municipios, 417 las eligen por sistemas normativos indígenas y 153 optan por el sistema de partidos políticos. De acuerdo con el Inegi, 6,7 millones de personas de más de cinco años hablan alguna lengua indígena, y de ellos un millón no habla español, estando la opinión pública mexicana en un 68% en desacuerdo con que los pueblos indígenas hablen solo su lengua materna y no español, lo que significa que existe una fuerte resistencia en México a aceptar que las comunidades hablen solo la lengua materna. Este es un ejemplo del alcance que sigue teniendo la cuestión indígena, y que apenas se refleja en el discurso político. Datos similares se podrían encontrar en Perú y Ecuador.

El segundo aspecto incorpora el impacto de la globalización. Como en otras regiones del mundo, América Latina ha registrado cambios notables en las dos últimas décadas como consecuencia de las transformaciones registradas en la

sociedad global internacional que se superponen sobre un comportamiento vernáculo. La gran mayoría de los países latinoamericanos acoge en sus capitales y conurbaciones a más de un tercio de la población nacional debido al intenso proceso de urbanización comenzado hace medio siglo. La ola migratoria supuso que avanzara una marea de trabajadores informales que terminó definiendo la estructura social nacida entonces. La consecuencia es que la identidad capitalina, centralista, de naturaleza fragmentaria, derivada de ese aluvión migratorio, se contrapone con la del interior que, si bien no es homogénea, se aferra a lo vernáculo, se defiende del centralismo, pero a la vez se acrisola ante la ausencia de las ventajas del centro. Esta diferenciación se hace palmaria en un país como Perú, paradigma de la informalidad, donde la formación auspiciada por Ollanta Humala, el Partido Nacionalista, tuvo su feudo electoral en el sur del país y un fuerte repudio en Lima y su conurbación.

Esta dualidad, que ya tiene carácter histórico, se ha visto trastocada por el impacto de la globalización a través de hábitos de consumo dinamizados por el despliegue neoliberal en el terreno cultural y de los valores, así como por el rápido y extensivo desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. El alto crecimiento económico de muchos países latinoamericanos en la década 2003-13 supuso la generalización a nuevas clases sociales de la ilusión del consumo, a la vez que contribuyó a la concentración de la riqueza en sectores muy reducidos. Entonces, la vieja dualidad de la desigualdad endémica que separa a una muy reducida minoría enriquecida de la generalidad empobrecida y mísera toma un perfil diferente. En efecto, el añejo supuesto capitalismo nacional al estar globalizado se despega de la vieja matriz nacional que solo permanece como referente folclórico. Esto es, se produce un escenario integrado por ciudadanos globalizados, perfectamente insertados en la maraña de las redes sociales potenciadoras de la individualidad más extrema y, consiguientemente, ajenos a las pautas identitarias nacionales clásicas que refuerzan la segregación insolidaria.

El Estado en su balanza fiscal se ve sometido al vaivén de los avatares de los necesarios flujos de capital internacional, de la apertura de nuevos mercados y de la incertidumbre de las cotizaciones de las materias primas y de los bienes de consumo primarios, dependiendo de ellos aún más que en la etapa previa a la política de sustitución de importaciones. Frente a este escenario, la nación, cada vez más atomizada e integrada por individuos autistas, queda al páiro del rescate por liderazgos promisorios que el presidencialismo como marco institucional ofrece a los imaginarios ciudadanos.